

CONFERENCIA



MANCHESTER
1824

The University of Manchester



**INTRODUCCIÓN AL MODELO CONSTITUCIONAL
ADMINISTRATIVO FEDERAL ARGENTINO:
SIMETRÍAS Y ASIMETRÍAS.**



Por Pablo Gutiérrez Colantuono

Introducción al modelo constitucional administrativo federal argentino: simetrías y asimetrías. (paper, Universidad de Manchester, abril-2019)

Por Pablo Gutiérrez Colantuono,
Profesor Universidad Nacional del
Comahue, Argentina -
drpablogutierrez@gmail.com -

Sumario: I. Notas básicas del sistema constitucional administrativo argentino. II. Derechos fundamentales III. Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevos derechos y garantías. IV. Procesos administrativos de la Convención y de la Constitución. V. Cogestión y co-construcción ciudadanía gobiernos. VI. Igualdad e inclusión.

Palabras claves: Ciudadanía. Tratados de Derechos Humanos. Control de constitucionalidad. Control de convencionalidad. Administraciones públicas.

I. Notas básicas del sistema constitucional administrativo argentino

El sistema constitucional argentino puede ser caracterizado, en aquello que interesa al objeto del presente, en una apretada síntesis bajo las siguientes notas:

1. Es constitucional y convencional social de derecho.
2. El sistema federal de distribución territorial del poder convive en base a las competencias que le son propias a las provincias con aquellas delegadas al poder federal expresamente y con las concurrentes – ejemplo, la protección ambiental - En palabras del máximo tribunal constitucional argentino, Corte Suprema de Justicia en adelante CSJN, "...en el sistema federal diseñado por la Constitución Nacional establece que las provincias conservan su autonomía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados, se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas sin intervención del gobierno de la Nación".
3. En el marco del derecho público no penal – objeto de nuestros aportes – poseen las provincias al igual que la federación en cada ámbito de su competencia la plena potestad de regular tanto aspectos procedimentales y procesales como sustanciales en las materias del derecho administrativo – desde el control judicial de la actividad de las administraciones públicas hasta leyes de las provincias en materia de responsabilidad del Estado local - .
4. Los derechos fundamentales contenidos en la constitución federal y en los distintos pactos internacionales de derechos humanos pueden ser ampliados en

su protección y contenido por la autonomía existente; nunca desconocidos ni desprotegidos de garantías suficientes. Los distintos derechos (civiles, políticos, económicos, sociales, culturales) se encuentran en igualdad de condiciones (exigibilidad cierta).

5. Los Tratados de Derechos Humanos, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica el cual es similar al Tratado de Derechos Humanos en Europa aunque con matices, poseen rango constitucional. Integran el bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico. No son meras pautas interpretativas a seguir por los tribunales internos, son mucho más: los tratados y las decisiones de quienes los aplican en el sistema internacional poseen efectos directos interno y a nivel constitucional. En los últimos tiempos se ha generado un intenso debate sobre el nivel de obligatoriedad interna por parte de los jueces, en especial de la CSJN , respecto de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH .

6. La última reforma constitucional llevada a cabo en el año 1994 incorporó mecanismos institucionales con la finalidad de atenuar el fuerte presidencialismo que ha caracterizado a la Argentina, y en general a los países de Latinoamérica. En los hechos, no ha dado resultados importantes.

7. Las consecuencias de esto último se hace visible en el campo del derecho administrativo, especialmente, por una fuerte tradición a la hipernormatividad administrativa – reglamentos administrativos – por parte de las distintas administraciones. A ello se suman períodos cíclicos en la historia argentina pendulares entre intervencionismo y libre mercado en el rol del Estado y por ende de las administraciones (su organización centralizadas, descentralizadas, empresas del Estado, regulación , desregulación, etc) en la economía.

8. El modelo del control judicial tiene la característica que cada juez - y no alguno en especial por razón de la materia, grado, etc - puede desplegar el control de convencionalidad y constitucionalidad de manera difusa, con alcances individuales ante la presencia de un caso. El control de constitucionalidad y convencionalidad se despliega de oficio.

9. El proceso judicial de control de las administraciones públicas puede ser efectuado por dos vías principalísimas, una ordinaria otra excepcional. 9.1 ordinaria: es el típico control judicial de la actividad administrativa desplegada por jueces con competencia para ello. Es obligatorio impugnar en sede de las propias administraciones públicas aquello que luego será objeto el reclamo judicial. Sólo y tan sólo se accede a tal instancia judicial una vez agotada la vía administrativa. Esto es tanto respecto de la administración pública federal como de aquellas que son parte de las provincias argentinas. 9.2 Vías excepcionales: son aquellas del orden constitucional, en especial la acción de amparo como acción rápida contra violaciones – acciones y omisiones estatales - directas y manifiestas de derechos constitucionales.

II. Derechos fundamentales

Es en esta apretada caracterización de nuestro sistema que la promoción y protección de los derechos fundamentales y sus contenidos mínimos dentro de un sistema federal de distribución del poder es un tema de especial interés académico, institucional y ciudadano.

Los derechos en el sistema actual no poseen distinción ni jerarquía entre ellos: así los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales más allá de que unos sean más prestacionales que otros, tienen idéntica jerarquía constitucional. Obligan unos y otros bajo la misma interpelación axiológica, legal, funcional y ciudadana. Ello convive, como hemos indicado, de manera simultánea a la autonomía competencial del sistema federal y los provinciales, con presupuestos propios bien diferenciales.

Asimetrías de asignación de fondos, antes mismos derechos y garantías, se observan en el vasto territorio argentino afectando parte de la garantía de la igualdad la cual es central junto a otras en nuestro sistema. La asignación de recursos no responde a la asignación igualitaria constitucional de derechos, en especial los de tipo prestacional – vivienda, salud, acceso a servicios públicos, entre otros -. En este sentido el sistema federal en apariencia puede transformarse en una barrera a la común e igual distribución de los recursos existentes y estos impactar negativamente en aquella garantía de la igualdad. La Corte IDH en diversas decisiones ha sido clara en este punto: la forma de distribución y organización del poder interno de los Estados no es justificativo posible frente al incumplimiento de obligaciones a su cargo.

Ello representa todo un desafío en la organización interna del poder, en especial con constituciones como la argentina que en sus propios textos aseguran la vigencia y exigencia de derechos civiles, políticos, sociales, culturales, ambientales.

Y allí la tensión entre los mínimos contenidos garantidos y la distribución territorial equitativa de la asignación de recursos es un tema de agenda no sólo del poder legislativo, también lo es de las administraciones públicas y del propio poder judicial ante la presencia de casos en que esta tensión se presenta en su rol de juez de la constitución y de la convención.

III. Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuevos derechos y garantías

El Pacto de San José de Costa Rica despliega su convencionalidad en sentido amplio desde varios principios, entre ellos el de la interpretación evolutiva. Es en base a tal principio que se logra que emerjan derechos y garantías que aparentemente no se encuentran visibles, o expresamente establecidos en la formulación expresa de sus textos. Esta tradición es común en diversos sistemas judiciales latinoamericanos, especialmente en Argentina. En efecto la CSJN posee hitos jurisprudenciales por los cuales ha "creado" derechos y garantías allí donde estos parecían no figurar. Se habla, en algunos casos, del activismo judicial en este y en otros puntos vinculados a las zonas de intersección y tensión de las competencias propias de la división de poderes. Se observa una frecuente judicialización en temas vinculados a derechos sociales básicos y su deber de ser garantizados por los gobiernos - salud, vivienda, agua, entre otros -.

La afectación de determinados derechos aún no previstos expresamente en los Tratados de Derechos Humanos, pero sí enunciados como afectados por las propias víctimas al tiempo de activar la jurisdicción transnacional de los derechos humanos, "fuerza" al intérprete a actualizar el contenido de los tratados de derechos humanos.

Es así como la Corte IDH ha expresado "nuevos derechos y garantías" o bien le ha otorgado contenido autónomo a determinados derechos que en principio aparecen como integrados dentro del contenido de otros: a. Derecho autónomo al medio ambiente; b. Derecho autónomo a la salud ; c. Garantía de la tutela administrativa efectiva-, para exigir la plena vigencia en los procedimientos administrativos del debido proceso por ante las administraciones públicas - como hemos explicado, estos poseen carácter de obligatorios y previos al acceso a la tutela judicial efectiva -; d. Garantía del control de convencionalidad, consistente en la obligación de los Estados a través de sus jueces de realizar de oficio el estudio de compatibilidad entre las normas internas con las del Pacto de San José de Costa Rica para cual deben entender a estas últimas según han sido interpretadas por la propia Corte IDH.

Estos son algunos de los ejemplos de aquello que representa una notable ampliación de derechos y de garantías protectorios de la dignidad de las personas a la vez que un importante ensanche del deber de garantías y de responder de los Estados miembros. La crítica de los Estados no se ha hecho esperar: estas obligaciones no existían expresamente al tiempo de adherir al Tratado, de allí su resistencia interna a adecuarse.

IV. Procesos administrativos de la Convención y de la Constitución

Los efectos de la constitucionalización del orden convencional de los Tratados de Derechos Humanos se proyectan en el ámbito de la justicia interna procesal administrativa.

La jurisdicción administrativa se ha visto impactada por la existencia de determinados estándares mínimos provenientes del subsistema de los derechos humanos, de aplicación directa. El orden de la normatividad de los tratados y la propia tarea interpretativa de la Corte IDH estructuran el contenido de tales estándares. Como es conocido, la Corte IDH lo hace por intermedio de su doble actividad: contenciosa –sentencias y resoluciones - y consultiva – opiniones consultivas -.

El fenómeno de la constitucionalización de los Tratados de Derechos Humanos ha transformado al juez interno con competencia procesal administrativa en juez de la convencionalidad de los derechos humanos. El juez interno despliega actividad constitucional y ahora también ejerce jurisdicción desde la convencionalidad mediante el llamado control de convencionalidad interno. La características de este nuevo modelo serán la simetría y la complementariedad en el despliegue de ambas dimensiones dentro de esa jurisdicción convencional y constitucional procesal administrativa. Al menos en el campo de la teoría, o del deber ser.

Tal como hemos adelantado los estándares internacionales de normas y criterios interpretativos ingresan por medio de la constitucionalización de los tratados de derechos humanos al sistema interno. El juez interno los hace efectivos en su propia jurisdicción contenciosa administrativa. Para ello utiliza el control de convencionalidad que le permite validar la norma interna con la internacional aplicando sus contenidos mínimos bajo la interpretación que de la misma ha brindado el intérprete auténtico, esto es la propia Corte IDH.

V. Cogestión y co-construcción ciudadanía gobiernos

La modernidad con sus notas positivas y negativas nos permite resignificar al sujeto de la relación jurídica entre autoridad y competencias públicas, administraciones y personas. Se potencian los derechos y deberes que caracterizan a la persona y se redirecciona la actuación de la propia administración. La finalidad es lograr ampliar derechos en las dimensiones individual, colectiva y social. La solidaridad y la co - construcción son las

herramientas en este nuevo diseño. No hay lugar para las miradas excluyentemente liberales de los derechos.

Por nuestra parte entendemos al concepto de ciudadanía como aquel que nos permite sintetizar un estándar mayor de disfrute de derechos; como así también de efectividad, en términos de garantías, en punto a reclamar la vigencia real de los mismos. La noción de ciudadanía refleja situaciones que incluso escapan a la vinculación territorial entre la persona y el Estado, ya que una multiplicidad de relaciones se proyecta más allá de los límites fronterizos territoriales y políticos de la organización estatal. Hablamos de ciudadanía respecto de los pueblos migrantes, con transitoriedad en un territorio determinado. También para incluir al específico abordaje cultural que se efectúa del dominio por parte de las poblaciones indígenas que escapan a las típicas notas de propiedad concebidas según parámetros del constitucionalismo del siglo XVIII.

Esa noción de ciudadanía pareciera vincularse más con la vocación de universalidad de las personas que respecto de una relación jurídica que vincula a la persona con una pertenencia territorial determinada. Posee legitimación suficiente en base a tal calidad para exigir condiciones propias que tornen operativa la dignidad de la persona.

El centro de atención, pues, viene determinado por la obligación de garantizarle a la ciudadanía la existencia digna y de desarrollo sostenible como parte del derecho fundamental a la vida. Y ello atraviesa cualquier estructura política-jurídica.

Por su parte la visión de los derechos articulados con los deberes humanos nos permite analizar la dimensión social y conectarlos con la finalidad de las administraciones públicas.

Aparece así la cogestión del mismo interés por ciudadanía y estas, el cual no es otro más que la dimensión social de la realización institucional del bienestar común en tanto ampliación de derechos de la comunidad toda. Y este es el punto de contacto entre nuestras modernas administraciones y la actual ciudadanía: ambas han de ser protagonistas en la cogestión de la dimensión social de las personas, en tanto estas y su desarrollo sostenido han de ser la centralidad del sistema. Este es el sentido de tematizar a los deberes humanos, en tanto estos lo son respecto de la familia, la propia comunidad y la humanidad toda.

Por su parte las administraciones públicas tienen el desafío de auto percibirse como diversas y no homogéneas, ya que el espacio ciudadano es la expresión de la diversidad cultural. Ello impone la necesidad de buscar nuevas maneras de vincularse con la ciudadanía; como también la ciudadanía debe mirar a sus administraciones desde una perspectiva propia social, y no meramente individual de sus derechos.

VI. Igualdad e inclusión

Partimos de impactar al espacio ciudadanía gobiernos desde aquello que hemos postulado respecto del nuevo constitucionalismo: está llamado a paliar el déficit estructural existente en muchos de los sistemas constitucionales occidentales, esto es la desigualdad. La carrera por el hiperconsumismo, la indiferencia global, los crecientes movimientos sociales discriminatorios y violentos, los niveles alarmantes de violencia de género, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos promovidas desde los propios gobiernos, la falta de exigencia – intencional – al “mercado” para que este sea funcional al desarrollo de la humanidad y no a la concentración de la riqueza, son algunos de los indicadores del camino equivocado elegido por parte de nuestras sociedades globales.

La desigualdad en términos reales y concretos existente al menos en nuestros países latinoamericanos ha llevado, quizás indirectamente, a la Corte IDH a construir un concepto fuerte de igualdad tanto en términos jurídicos como institucionales.

Tiene dicho la Corte IDH:

“El principio de protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en varios instrumentos internacionales y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el denominado *ius cogens*. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico.”.

Bajo tal idea, la Corte IDH ha receptado a la garantía de la igualdad como integrante del derecho imperativo de los derechos humanos, integrándola así al concepto del *ius cogens*. Todo lo cual no resulta menor al menos en el plano

de las consecuencias que ello genera en los ámbitos institucionales y, especialmente, en las denominadas acciones positivas estatales.

¿Podemos continuar “escondiendo” detrás de la seguridad jurídica, los alarmantes índices de pobreza e inequidad? ¿Podemos seguir sosteniendo que la seguridad jurídica es garantía de las inversiones y que éstas a su vez derraman sus efectos sobre la distribución equitativa de la riqueza?

Pareciera ser que en este plano los Estados deberían tener una fuerte injerencia en dos vertientes al menos: directamente, a través de sus acciones positivas; indirectamente a través de la regulación eficiente y suficiente de determinados sectores privados para lograr una sociedad más inclusiva.

La formulación de planes sociales, económicos y culturales debe adecuarse prioritariamente a la atención de los grupos vulnerables bajo la idea de permitir la movilidad ascendente en la titularización y goce de los derechos fundamentales. Es el diseño del presupuesto estatal una medida de acción positiva en sí mismo, en tanto éste ha de ser pensado y planificado desde la técnica de injerencia estatal con fines de igualación. La división del poder horizontal y vertical tiene este objetivo y no otro.

Ya para finalizar diremos que, en nuestro criterio, las notas relevantes de la dimensión ciudadana de las administraciones tal como la percibimos, entre otras, serían las siguientes:

- El espacio público. La ciudadanía y las administraciones promueven la convivencia armónica de las expresiones de la diversidad bajo al menos las reglas de neutralidad e impersonalidad. La finalidad buscada es la realización social de las personas. Y el espacio público es el espacio atravesado y “abrazado” por y para la vida ciudadana.
- La participación en la gestión de los asuntos públicos. Ello implica no tan solo el acceso a la información pública y el debate de determinados tópicos de las políticas públicas por diversos mecanismos participativos – las audiencias públicas, son uno de ellos -. Importa también la efectiva permeabilidad de la decisión pública y del diseño de la política pública. La relegitimación permanente de aquella legitimidad alcanzada por el voto democrático. Sin impacto real en la toma de decisión, la transparencia carece de finalidad y se transforma en un simple postulado.
- La calidad de vida. La concreción del espacio ciudadano como espacio de calidad de vida o buen vivir. La generación de condiciones en que se promueva

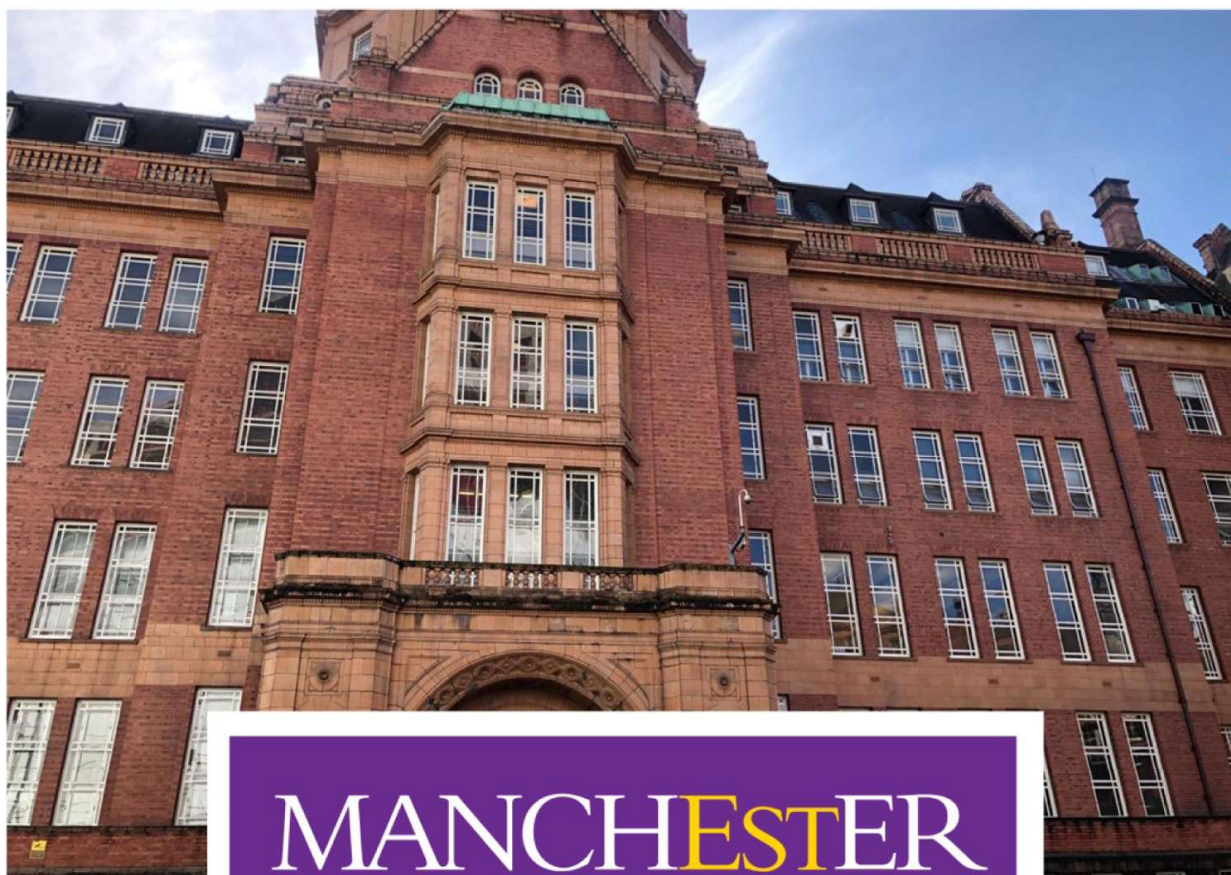
el desarrollo equitativo, traducido en el desarrollo sostenible social, económica y culturalmente de las personas. Este es un tema central ya que la función de los gobiernos ha de ser facilitadora del derecho al desarrollo de las personas.

- El control social. ¿Existe un derecho a controlar las políticas públicas y sus contenidos de desarrollo económico, social y cultural por parte de la sociedad? Creemos que sí, el principio de igualdad y trato no discriminatorio nos permite transversalmente fiscalizar cualquier acto de gobierno en términos generales con el fin de corregir las asimetrías existentes. Hablamos así de la exigibilidad de determinados mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.

La clave en estos tiempos modernos es encontrar las repuestas, de entre otros interrogantes, a estos tres:

- ¿Cómo se co-construyen las agendas ciudadanías gobiernos?
- ¿De qué manera se relegitiman nuestras democracias en las que en diversas ocasiones aparecen zonas de no derecho y hasta en algunos supuestos excepcionado directamente al sistema de derecho?
- ¿Qué tiene por aportar el Derecho Público y en especial el Derecho Administrativo en este objetivo principal de la ciudadanía y los gobiernos consistente en lograr un desarrollo sostenible social, económico y ambiental tanto en el plano individual como social y humanitario de las personas?

CONFERENCE



MANCHESTER
1824

The University of Manchester



**INTRODUCTION TO THE ARGENTINE FEDERAL
ADMINISTRATIVE CONSTITUTIONAL MODEL:
SYMMETRIES AND ASYMMETRIES.**



By Pablo Gutiérrez Colantuono

"Introduction to the Argentine federal administrative constitutional model: symmetries and asymmetries" – Manchester, April 2019 -

by Pablo Gutiérrez Colantuono,

Professor of Comahue National University, Argentina -
drpablogutierrez@gmail.com -

Summary: I. Basic notes about Argentine administrative constitutional system. II. Fundamental rights III. Inter-American Court of Human Rights, new rights and guarantees. IV. Administrative Processes of the Convention and the Constitution. V. Co-Management and a co-construction citizenship governments. VI. Equality and inclusion.

Keywords: Citizenship. Human Rights Treaties. Constitutional Control (or review). Conventional Control (Conformity with Treaties). Public Administrations.

I. Basic notes about the Argentine administrative constitutional system

The Argentine constitutional system can be characterized, in that which interests to the object of this presentation, in a tight synthesis under the following notes:

1. It Is Constitutional and conventional social law.
2. The federal system of territorial distribution of power coexists on the basis of the competencies that are proper to the provinces with those delegated expressly to the federal power and with the concurrent ones -for example, the environmental protection- The highest Argentine constitutional court, Supreme Court of Justice (from now on: CSJN) has expressed, "... In the federal system designed by the National Constitution states that, the provinces retain their absolute autonomy in all matters regarding to the powers not delegated, they build, their own Institutions and they are governed by those (institutions), without intervention of the federal government.. "
3. Within the framework of the public non-penal law – the object of our presentation – the provinces have as well as the federation in each area of

their competence, the full authority to regulate procedural aspects as well as substantive aspects in the matters of Administrative law; from the judicial control of the activity of the public administrations to those province's laws concerning the local State's responsibility.

4. The fundamental rights contained in the Federal Constitution and in the different international Covenants on human Rights may be extended in their protection and content by the existing autonomy. Never unknown or unprotected from sufficient guarantees. The following different rights (civil, political, economic, social, cultural) are on equal conditions (with certain enforceability).

5. Human Rights Treaties, including the Pact Of San José, Costa Rica, which is similar to the Human Rights Treaty in Europe but with differences, have constitutional rank. They Integrate the constitutionality block of our legal system. They are not merely interpretative guidelines to be followed by the internal courts. They are much more: the Treaties and the decisions of those who applied in the international system have an internal direct effects and to a Constitutional level. In recent times there has been an intense debate about the role of the Judges in the Level of the internal obligation, especially of those who conform the CSJN, about the decisions of the Inter-American Court of Human Rights (From now on Court HDI).

6. The last constitutional reform in 1994, incorporated Institutionals mechanisms in order to reduce the strong presidentialism that has characterized Argentina and the Latin American countries in general, with non important results.

7. The consequences of this, are made visible in the field of Administrative Laws, especially, by a strong tradition to a hyper-normative Administrative regulations – by the different Administrations. In addition, to a cyclical periods in the history of Argentina, that moves between interventionism and free market in the role of the State and therefore of the administrations (their organization centralized, decentralized, State companies, regulation, deregulation, etc.) in the economy.

8. The model of the judicial control has the characteristic that each judge-and not some in particular by reason of the subject, degree, etc-can display the control of conventionality and constitutionality in a diffuse way, reaching the individuals in the presence of a case. The control of Constitutionality and convention is unfolded (proceeding ex officio- act on his own motion)

9. The judicial process of control of the public administrations can be carried out by two principal ways, an ordinary way and an exceptional way. 9.1 Ordinary Way: It is the typical judicial control of the administrative activity deployed by judges with the proper competence for it. It is obligatory to challenge at the headquarters of the public administrations what will then be the subject of the judicial claim. The access to this instance it is possible once and only once the administrative route has been exhausted, regarding about the federal public administration as for those that are part of the Argentinean provinces. 9.2 Exceptional Ways: They are those of constitutional order, especially the Action of Protection (Known as "Amparo"), as a quick action against violations – State-direct and manifest actions and omissions of constitutional rights.

II. Fundamental rights

It is in this short characterization of our system that the promotion and protection of fundamental rights and their minimum contents within a federal system of distribution of power becomes a subject of special academic, institutional and citizen interest.

The rights in the current system have no distinction or hierarchy between them: thus civil, political, economic, social and cultural rights in spite that some have better performance than others, have identical constitutional hierarchy. They compel each other under the same axiological interpellation, legal, functional and civic. These coexist, as we have indicated, simultaneously with the autonomy in the competence of the federal system and the provincial ones, with their own budgets, well differentiated.

Asymmetries of allocation of funds, before the same rights and guarantees, are observed in the vast Argentine territory affecting part of the guarantee of equal rights which is central among others in our system.

The allocation of resources does not respond to the equal constitutional allocation of rights, especially those of social benefits type – housing, health, access to public services, among others. In this sense the federal system in appearance can be transformed into a barrier to the common and equal distribution of existing resources and these impact negatively on that guarantee of equal opportunities. The HDI Court in various decisions has been clear at this point: the way of distribution and organization of the internal power of a State is not possible in the face of non-compliance with their obligations under its responsibility.

This represents a challenge in the internal organization of power, especially with constitutions like Argentina's, which in their own texts ensure the duration and demands of the civil, political, social, cultural and environmental rights.

And there, the tension between the minimum guaranteed content and the equitable territorial distribution of the allocation of resources becomes a topic of agenda not only of the legislative power, also of the public administrations and of the own judiciary, before the presence of cases in which this tension is presented in his role as Judge of the Constitution and of the Convention.

III. Inter-American Court of Human Rights, new rights and guarantees

The Pact of San José of Costa Rica displays its conventionality in a full sense from several principles, including that of evolutionary interpretation. It is based on this principle that it is achieved that rights and guarantees that seemingly are not visible, or expressly established in the express formulation of its texts, emerge. This tradition is common in various Latin American judicial systems, especially in Argentina. In fact, the CSJN possesses jurisprudential milestones by which it has "created" rights and guarantees where these seemed not to appear. In some cases, there is a talk of judicial activism in this and other points linked to the areas of intersection and tension of the division of power. It is observed, a frequent judicialization on issues related to basic social rights and the duty of the Governments to guarantee those such as – health, housing, water, among others.

The impact of certain rights not yet expressly provided in Human Rights Treaties, but stated as affected by the victims themselves while activating the transnational jurisdiction of human rights, "force" the Interpreter to Update the content of human rights treaties.

This is how the HDI Court has expressed "new rights and guarantees" or has granted it autonomous content to certain rights that appear to be integrated into the content of others: a. Autonomous Law of the environment; B. Autonomous Right to health; C. Guarantee of effective administrative protection in order to demand the full force in the administrative procedures of due process before the public administrations-as we have explained, these are obligatory and previous to the access to the effective judicial guardianship; D. Guarantee of Conventionality Control, consisting in the obligation of the States through their judges, to carry out the study of compatibility between the internal norms with those of the Pact of San José of Costa Rica for which

they must understand the latter as they have been interpreted by the Court itself HDI.

These are some of the examples of what represents a remarkable extension of rights and guarantees intended to protect the dignity of the people while a significant widening of the duty of guarantees and response of the Member States. The criticism of the States (countries) came quickly: these obligations did not exist specifically at the time of adherence to the Treaty, therefore, their internal resistance to adapt.

IV. Administrative processes of the Convention and the Constitution

The effects of the constitutionalization of the conventional order of Human Rights Treaties are projected in the field of internal administrative procedural justice.

The administrative jurisdiction has been impacted by the existence of certain minimum standards coming from the human rights subsystem, of direct application. The order of the standards of the Treaties and the interpretative task of the Court HDI structure the content of such standard. As it is known, the HDI Court does so through its double activity: contentious – judgments and resolutions-and consultative – Advisory Opinions-

The phenomenon of the constitutionalization of Human Rights Treaties has transformed the internal judge with administrative procedural competence into a conventionality judge of Human Rights. The internal judge deploys constitutional activity and now also exercises jurisdiction from conventionality through the so-called internal convention control. The characteristics of this new model will be the symmetry and complementarity in the deployment of both dimensions within that conventional and constitutional administrative procedural jurisdiction. At least in the theory's field, or of duty to be.

As we have advanced, international standards and interpretative criteria enter through the constitutionalization of human rights treaties to the internal system. The internal judge makes them effective in their own contentious administrative jurisdiction. For This purpose, it uses the conventional control that allows it to validate the internal norm with the international one, applying its minimum contents under the interpretation that the authentic interpreter has provided, this is the HDI Court itself.

V. Co-management and co-construction citizenship governments

Modernity with its positive and negative notes allows us to re-signify the subject of the legal relationship between authority and public powers, administrations and people. They rights and duties that characterize the person enhance, and re-directs the performance of the administration itself. The goal is to achieve extend rights in the individual, collective and social dimensions. Solidarity and co-construction are the tools of this new design. There is no room for the liberal looks that excludes rights.

We understand the concept of citizenship as the one that allows us to synthesize a higher standard of enjoyment of rights; as well as effectiveness, in terms of guarantees, to the point of claiming the actual validity of them. The notion of citizenship reflects situations that even escape the territorial link between the citizen and the State, since a multiplicity of relationships are projected beyond the territorial and political frontiers of the government organization. We speak of citizenship in regards to the migrating people, with transience in a given territory. Also, it includes the specific cultural approach, and the domination, made of by the indigenous populations that escape the typical notes of property conceived according to the parameters of constitutionalism of the eighteenth century.

This notion of citizenship seems to be more linked to the vocation of universality of people than to a legal relationship that links the person with a particular territorial belonging. It has sufficient legitimacy on the basis of such quality to demand its own conditions that turn the dignity of the person.

The center of attention, therefore, is determined by the duty to guarantee to the citizens, a existence worthy of human beings, dignified, achieving sustainable development as part of the fundamental right to life. And this, it crosses any political-legal structure.

On the other hand, the vision of rights articulated with the human duties allows us to analyze the social dimension and connect them with the purpose of the public administrations.

This shows the co-management of the same interest between citizens and these, which is nothing more than the social dimension of the institutional realization of common welfare as an extension of the rights of the whole community. And this is the key point between our modern administrations and the current citizenship: both must be principal actors in the co-management of the social dimension of people, while these and their sustained

development must be the centrality of the system. This is the sense of underscore to human duties, as long as they are in relation to the family, the community itself and all humanity.

The public administrations have the challenge of self-perceiving as diverse and non-homogeneous, as the citizen space is the expression of cultural diversity. This imposes the need to look for new ways of getting involved with the citizenship; as also citizens must look to their administrations from a social perspective, and not merely individual of their rights.

VI. Equality and inclusion

We started from impacting to the space citizenship governments from what we have postulated regarding the new constitutionalism: it is called to alleviate the structural deficit existing in many of the Western constitutional systems, for this is social inequality. The race for hyper-consumerism, the global indifference, growing discriminatory and violent social movements, alarming levels of gender-based violence, the systematic human rights violations promoted by Governments themselves, the lack of demand – intentional – to the "market" for this to be functional to the development of humanity and not to the concentration of wealth, are some of the indicators of the wrong path chosen by our global societies.

The inequality in real and concrete terms existing, at least in our Latin American countries has led, perhaps indirectly, to the HDI Court to build a strong concept of equality in both legal and institutional terms.

The Court IDH has expressed:

"The principle of equal and effective protection of the law and of non-discrimination constitutes an outstanding fact in the human rights system enshrined in various international instruments and developed by the doctrine and jurisprudence. In the current stage of the evolution of international law, the fundamental principle of equality and non-discrimination has entered the so-called *ius cogens*. On it rests the legal scaffolding of the national and international public order and permeates the whole legal system."

Under Such an idea, the HDI Court has captured the guarantee of equality as a member of the imperative human rights law, integrating the concept of *ius cogens*. All of which reaches out an important level on the consequences that this generates in the institutional areas and especially in the so-called positive state actions.

Can we continue hiding behind legal certainty, the alarming indexes of poverty and inequality? Can We continue to argue that legal certainty is a guarantee of investment and that these in turn, spill its effects on the fair distribution of wealth?

It Seems that at this point, the governments should have a strong influence at least, on two sides: directly, through their positive actions; Indirectly through an efficient and sufficient regulation of certain private sectors to achieve a more inclusive society.

The development of social, economic and cultural plans must be primarily adapted in attention of vulnerable groups, under the idea of allowing upward mobility, ensuring the enjoyment of fundamental rights. It Is the design of the state budget a measure of positive action in itself, whereas it Is to be thought and planned from the technique of State interference for the purposes of equalization. The Division of horizontal and vertical power has this objective and not another.

Finally we will say that, in our opinion, the relevant notes of the citizen dimension of the administrations as we perceive, among others, would be the following:

A. Public space. Citizenship and administrations promote harmonious coexistence of expressions, diversity, under at least the rules of neutrality and impersonality. The purpose, is the social fulfillment of the people. And The public space is the space traversed and "embraced" by and for the civic life.

B. Participation in the management of public affairs. This implies not only the access to public information and the debate on certain topics of public policies by various participatory mechanisms – public hearings are one of them. It also Imports the effective permeability of public decision and the design of public policy. The permanent re-legitimization of that legitimacy obtained by the democratic vote. With no Real Impact on decision making, transparency lacks purpose and becomes a simple premise.

C. Quality of life. The Concretion of the citizen space as a space of quality of life or good living. The generation of conditions in which equitable development is promoted, translated into social, economic and culturally sustainable development of people. This is a central issue because the role of government is to be a facilitator for the right to develop and growth of their citizens.

D. Social control. Is There a right to control public policies and their contents of economic, social and cultural development on the part of society? We Believe that yes, the principle of equality and non-discriminatory treatment allows us transversally to oversee any act of government in general terms in order to correct the existing asymmetries. We are then, talking about the right to demand essential minimums economic, social and cultural rights.

The key in these modern times is to find the answer, among other questions, to these three:

1. How are the agendas co-constructed citizenships governments?

2. In what way our democracies are legitimized in areas where there is a lack of rights or of non-right appear in the right system.

3. What is there to contribute to Public Law and especially Administrative Law in this main objective of citizenship and Governments which is to achieve sustainable social, economic and environmental development, both at the individual and social levels, and humanitarian, for everyone?





Manchester, 4th April 2019

To Whom It May Concern (Universidad Nacional del Comahue)

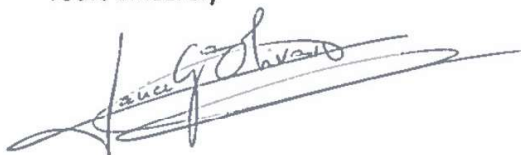
Dear Sir/Madam

I am pleased to inform you that Prof Pablo Gutiérrez Colantuono, delivered a lecture entitled 'Constitutional Law, Federalism and Human Rights' at the University of Manchester's School of Law on Wednesday 3rd April 2019. He met the Head of School, Prof Chris Thornhill, as well as other colleagues and students at both undergraduate and postgraduate level.

His lecture was thought-provoking, thorough and engaging, and it was very well received by the student cohort and academics alike.

We shall look forward to welcoming Prof Gutiérrez Colantuono at our institution in future academic years.

Yours Sincerely



Dr Javier García Oliva

Senior Lecturer in Law

University of Manchester

Manchester, 4th April 2019**TRADUCCIÓN:**

A quien corresponda: (Universidad Nacional del Comahue)

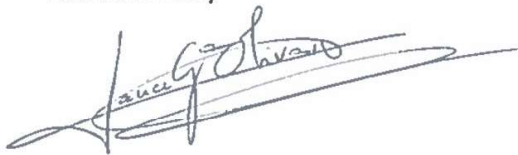
Estimado Señor/Señora

Es con mucho placer que informo que el Prof. Pablo Gutiérrez Colantuono, brindó una conferencia titulada "Leyes Constitucionales,. Federalismo y Derechos Humanos" en la Escuela de Leyes de la Universidad de Manchester el Miércoles 3 de Abril de 2019. Se reunió con el Director de la Escuela de Leyes, Prof. Chris Thornhill, colegas y estudiantes de los niveles de Licenciatura y Posgrado.

Su disertación nos desafió al pensamiento profundo, fue exhaustivo, atractivo, y muy bien recibido tanto por el cuerpo estudiantil como por el cuerpo académico.

Deseamos, desde ya, dar la bienvenida al Prof. Gutiérrez Colantuono en nuestra institución en los futuros años académicos.

Yours Sincerely



Dr Javier García Oliva

Senior Lecturer in Law

University of Manchester